

Crisis social y marginalidad

*Norberto Alayón**

Como país, es obvio que retrocedimos brutalmente. El autor afirma que los argentinos perdimos los derechos sociales a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, al empleo, a la intangibilidad de los salarios, a la autonomía de los recursos y servicios estratégicos (petróleo, comunicaciones, aeronavegación, electricidad, gas, agua, etc.) y ahora que avanzan sobre los ahorros de la población. En términos de consignas primero vinieron por los derechos sociales, ahora vinieron por los ahorros y mañana (que ya casi es hoy)... por las tierras.

Para enfrentar esta cruda realidad, en el artículo se sostiene que habría que apelar a aquella afirmación de Antonio Gramsci, cuando planteaba “la necesidad de ejercitar al mismo tiempo el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad” y que a nosotros nos corresponderá trabajar sobre el eje de rescatar “el optimismo de la voluntad”, que debe pasar simultáneamente por la resistencia y las propuestas.

* Ex vicedecano y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Hablar de crisis social nos obliga, indefectiblemente, a hacer referencia a crisis política y a crisis económica, es decir –ni más ni menos– a crisis del conjunto del modelo de funcionamiento societal.

Una vez salidos, en 1983, de la noche oligárquica, antinacional y terrorista, nuestra Argentina intentó reencauzar su destino en la perspectiva de fortalecer la democracia. No era tarea para nada fácil, después de tantos años de retroceso. Entroncar la democracia formal con la democracia real, es decir, recomponer las bases de una sociedad hacia la equidad y la inclusión, colisionaba con los intereses de minorías privilegiadas por la exacción histórica y coyuntural que no deseaban un país fuerte y digno.

Pero la opción definitiva del derumbe hacia la catástrofe actual, toma forma indubitable con la presidencia de Carlos Menem, durante el decenio 1989-1999. Por cierto, acompañado activamente por Eduardo Duhalde, ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual presidente de la Nación. El proceso sistemático de destrucción del interés nacional (para colmo invocando las históricas e inconclusas banderas del peronismo de independencia económica, de soberanía política y de justicia social) y de los derechos sociales fue terriblemente exitoso.

Enfrentar la clave disyuntiva de

cómo generar un proceso de acumulación con justicia social, no sólo fue dejada de lado, sino que se optó por simplificar patéticamente la ecuación: hoy no tenemos acumulación alguna, ni tampoco gozamos de justicia social. Sólo ganaron aquellos sectores articulados con el circuito financiero internacional.

Este proceso de degradación político-social caló demasiado hondo en la sociedad argentina. Terminó arrojando al desempleo al 25 % de la población económicamente activa y a la mitad del país debajo de la línea de pobreza. Millones de esos pobres, además, están debajo de la línea de indigencia. Esto pasa en el país autoconsiderado “el granero del mundo” y entre los más promisorios del planeta a inicios del siglo XX. Tenemos promedios de pobreza en las provincias del NEA (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa) que superan el 66 %. Estamos cerca del 60 % de pobreza en el segundo cordón del conurbano bonaerense. No se requiere ninguna erudición para reconocer la creciente marginalidad social que deviene del modelo de funcionamiento que se adoptó para nuestra sociedad.

La pobreza actual dejó de relacionarse exclusivamente con el desempleo. Ahora está también muy estrechamente ligada con los fenómenos de explotación exacerbada. No sólo son pobres los desempleados, sino también aquellos que tienen trabajo pero con



bajísimo nivel de ingresos y en condiciones de desprotección. Si las personas con ocupación en el mercado de trabajo perciben salarios paupérrimos –como ocurre en la actualidad- no cabe la menor duda de que habrán de transformarse en pobres y hasta en indigentes.

La Confederación General del Trabajo reconocida oficialmente y las Cámaras Empresariales, en el marco de la negociación salarial, acaban de firmar un acta en la que reconocen la necesidad de **“recuperar el poder alimentario”** de los sueldos. Sin eufemismo alguno, se convalida que, en la actualidad, la capacidad reproductiva de los salarios que perciben los trabajadores ni siquiera está cubriendo las necesidades básicas de alimentación.

Si se reconoce, con semejanza soltura, que se deben aumentar los salarios para “recuperar el poder alimentario”, tácitamente se está aceptando que la remuneración que percibe una enorme masa de trabajadores no permite satisfacer las necesidades ligadas con la salud, la vestimenta, la educación, la vivienda, la recreación, etc. **El salario alcanzará apenas para comer.**

Este fenómeno nos retrotrae a los inicios del capitalismo, en el siglo XVIII, cuando a los ejércitos de menesterosos, sin protección alguna, sólo se les ofrecía condiciones infrahumanas de trabajo, en extensas y agotadoras jornadas a

cambio de un pago miserable.

En algunas instituciones, como por ejemplo los Tribunales de Menores, resulta sugerente verificar cómo disminuyó la atención de los pobres estructurales. Los usuarios que predominan son los nuevos pobres. Los pobres más marginalizados ni siquiera son objeto de políticas de control social. Van “quedando” meramente recluidos en sus ámbitos físicos o sólo son objeto de acciones de represión.

Se redujeron los derechos, se debilitaron las políticas sociales universales, se redujeron las políticas de asistencia focalizadas, la cacareada filantropía empresaria brilla por su ausencia. A estos sectores de compatriotas, parece que sólo les va quedando la posibilidad de algunas acciones caritativas, pelear “horizontalmente” entre ellos por la disputa de migajas o directamente esperar resignadamente la enfermedad o la muerte.

Esta oprobiosa realidad no sólo compromete el presente sino también el futuro, por décadas o tal vez por centurias.

Como país, es obvio que retrocedimos brutalmente. Perdimos los derechos sociales a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, al empleo, a la intangibilidad de los salarios, a la autonomía de los recursos y servicios estratégicos (petróleo, comunicaciones, aeronavegación, electricidad, gas, agua, etc.) y ahora encima avanzan sobre los ahorros

de la población. En términos de consignas podríamos decir que primero vinieron por los derechos sociales, ahora vinieron por los ahorros y mañana (que ya casi es hoy)... por las tierras.

Para enfrentar esta cruda realidad, creemos que tendremos que apelar a aquella afirmación de Antonio Gramsci, cuando planteaba “la necesidad de ejercitar al mismo tiempo el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”.

El pesimismo emana de los datos objetivos de todos los días. Nadie lamentablemente, de buena fe, los puede negar, excepto algunos políticos y funcionarios inveteradamente falaces, los organismos internacionales de crédito (es decir, los expoliadores), o los “sensibles” banqueros.

A nosotros nos corresponderá trabajar sobre el eje de rescatar “el optimismo de la voluntad”, que creemos que debe pasar simultáneamente por **la resistencia y las propuestas**.

La **resistencia**, que implique el ejercicio activo de defender, en cada caso, lo poco o mucho que nos quede de derechos, en todos los ámbitos en que estemos involucrados. La resignación y el escepticismo operan como las mejores recetas para garantizar la pérdida definitiva de los derechos. Cabrá volver a reivindicar —una vez más— el papel de los hombres en la historia. Porque la historia de las sociedades, la seguimos construyendo los hombres, aunque en

condiciones muy difíciles y estructuradas, pero no definitivamente inmutables.

Las **propuestas** de acción, por modestas que sean o parezcan, que reparen y/o prevengan los agudos niveles de malestar social existentes, es decir que apunten hacia el mejoramiento de la sociedad, nos conectan con la alternativa de sociedad que tienda hacia la integración y no hacia la exclusión; hacia la equidad y no hacia la injusticia social; hacia el fortalecimiento de una nación para todos y no hacia la dualización de sus habitantes, con derechos marcadamente diferenciados, según pertenezcan a uno u otro sector social.

El apoyo o generación de **opciones solidarias** para atender la extendida problemática social actual, pueden constituir un reaseguro estratégico para la construcción de una sociedad más humana.

En las instituciones del llamado “bienestar social”, tendremos que actuar innovadoramente —a la par de reivindicar mayores recursos— para limitar al máximo las mortificaciones burocráticas y/o profesionales con las que, con frecuencia, se somete a los usuarios. Por ejemplo, aunque parezca nimio, se debe dejar de citar a la gente a las 7 de la mañana, cuando la atención de los administrativos o de los profesionales recién comienza a las 9 horas. Tenemos que atender a la gente sin hacer-

les sentir el peso o la supremacía del “saber profesional”, erradicando a la vez ese tipo de tuteos enérgicos y/o de “lenguaje pediátrico” con que se suele tratar al usuario adulto, lo cual contribuye a disminuirlo aún más. Este tipo de ejemplos, parece poco. ¡En verdad, es muy poco! Pero igual tenemos que recordar que poco es más que nada (especialmente en esta época de crisis general), y que ese poco puede y debe ser articulado con un proceso creciente de mejoramientos diversos.

En suma: no proponemos, en modo alguno, renunciar a la lucha por la generación de cambios más estructurales. Pero, a la vez, sugerimos no desatender los cam-

bios que aparecen como menos relevantes. Es decir, aunar, amalgamar lo macro con lo micro, en pos de propiciar la reconstrucción de una sociedad que, por lo menos, vaya disminuyendo los brutales niveles de inequidad y de marginación existentes.

Simultáneamente, tendremos que seguir pensando y actuando de modo de contribuir a la generación de opciones políticas para sustraer a la nación de este hundimiento generalizado, cuyos responsables —en muchos casos— extrañamente continúan ocupando cargos de primer nivel en la conducción de nuestro país.

Julio de 2002